



La escasez de maestros conduce a aulas superpobladas como esta en la región del Alto Oeste, Ghana. PHOTO: DEBORAH LOMOTÉY, ACTIONAID

LA EDUCACIÓN FRENTE A LA AUSTERIDAD

JUNIO 2022

POR QUÉ HAY QUE ACABAR CON LAS LIMITACIONES SALARIALES DEL SECTOR PÚBLICO, QUE SOCAVAN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y MINAN LA PROFESIÓN DOCENTE

El mundo necesita como mínimo 69 millones más de docentes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible sobre educación en 2030; a pesar de ello, el profesorado se enfrenta a una realidad de salarios bajos y deterioro de las condiciones laborales, lo que repercute en la situación de la profesión. Hay una causa común clara que vincula la baja remuneración y la escasez de docentes: ambos fenómenos se derivan de décadas de reducción de la financiación pública como consecuencia directa de la imposición de limitaciones en la masa salarial del sector público. Ya sea por decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de los ministerios de Finanzas que comparten esa misma ideología neoliberal y esa política económica, los recortes y la congelación del gasto salarial público se han convertido en el estandarte fundamental de unas políticas de austeridad más amplias. El profesorado es el grupo con mayor representación en la mayoría de plantillas públicas, por lo que las restricciones del gasto salarial global afectan desproporcionadamente al personal docente, presionan la remuneración a la baja e impiden nuevas contrataciones. Una reciente investigación publicada en el informe de 2021 Lo público contra la austeridad de ActionAid, la Internacional de la Educación y la Internacional de Servicios Públicos revelan que estas políticas carecen de una base sólida que demuestre su eficacia y suponen un grave daño para el avance, no solo de la educación, sino también de otros objetivos de desarrollo esenciales.

Tulsi Neupane

Soy profesor de inglés y director de la escuela Lalit Bikas Adharvud. Pertenezco a la Asociación de Docentes de Nepal. Nuestro salario no ha variado en los cuatro últimos años. Tras la pandemia de COVID, he hablado con un buen número de docentes que no reciben su salario o han perdido el trabajo. Creo que para el sistema educativo es perjudicial que tantas y tantos docentes con experiencia estén ahora en situación de no volver nunca a su trabajo y que, en su lugar, se contrate a personal sin experiencia ni formación.

Testimonio recogido por la Internacional de la Educación

Hace más de 15 años, ActionAid documentó los efectos de los topes en la masa salarial pública impuestos por el FMI como condición explícita para los préstamos a países de bajos ingresos y demostró que impedían el progreso de la educación. Este trabajo contribuyó a que el FMI diera marcha atrás y eliminara esos límites como condición para la concesión de préstamos en todo el mundo en 2007. Sin embargo, las investigaciones recientes ponen de manifiesto que esas políticas han vuelto a imponerse con fuerza. Puede que ya no sea un requisito para obtener un préstamo, pero el FMI está usando una política de asesoramiento coercitivo para que los gobiernos recorten o congelen los salarios públicos en el 78 % de los 23 países estudiados. Restringir el gasto en la plantilla pública sigue siendo la norma, incluso aunque los propios estudios del FMI sugieren que el neoliberalismo lleva cuarenta años recibiendo alabanzas inmerecidas y ha asfixiado ese crecimiento y desarrollo que se supone que debía potenciar.

La última investigación realizada en 15 países ha desvelado que:

- A pesar de las afirmaciones del FMI de que la contención de la masa salarial es solo temporal, a los 15 países estudiados se los **condujo a recortar o congelar el gasto salarial público durante al menos tres años**, un periodo que aumentó hasta los cinco o seis años en ocho casos.
- Teniendo en cuenta solo esos 15 países, **los recortes recomendados por el FMI ascienden a casi 10 000 millones de dólares**, el equivalente a **eliminar más de 3 millones de docentes de primaria**.
- En esos 15 países, un **aumento de solo un punto porcentual del PIB destinado a la masa salarial del sector público permitiría la contratación de 8 millones de docentes más**, lo que equivaldría aproximadamente a resolver el déficit de profesorado.

Tabla: Recortes en la masa salarial pública y qué habría significado un aumento

País	Masa salarial pública como % del PIB cuando el FMI recomendó su recorte más reciente	Aumento de un punto en la masa salarial pública como % del PIB en número de docentes (usando el salario medio)
Ghana	RECORTE desde el 8,7 % (2017)	115,331
Kenia	RECORTE desde el 4,4 % (2021)	182,965
Liberia	RECORTE desde el 10,1 % (2021)	5,756
Malawi	RECORTE desde el 7,7 % (2020)	572,292
Nigeria	RECORTE desde el 1,9 % (2018)	4,117,893
Sénegal	RECORTE desde el 6,5 % (2017)	29,229
Sierra Leona	RECORTE desde el 7,9 % (2021)	5,944
Tanzanie	RECORTE desde el 5,4 % (2017)	122,221
Ouganda	RECORTE desde el 3,5 % (2017)	37,296
Zambia	RECORTE desde el 9,1 % (2019)	50,248
Zimbabwe	RECORTE desde el 17,1 % (2017)	22,202
Bangladesh	CONGELACIÓN AL 2,1 % (2020)	845,526
Népal	RECORTE desde el 3,7 % (2018)	82,119
Vietnam	RECORTE desde el 9,1 % (2019)	384,619
Brasil (nivel federal)	RECORTE desde el 4,6 % (2020)	1,377,603
TOTAL		7,951,244

Uno de los resultados más impactantes es que **no hay una lógica, un razonamiento o unas pruebas claras que justifiquen cuándo son necesarios los recortes o la congelación de los salarios públicos o cuánto es suficiente**. Por ejemplo, a Zimbabwe, con una masa salarial del 17,1 % del PIB, se le aconsejó que recortara, pero también a Liberia, que gasta el 10,1 %, a Ghana, con un 8,7 %, a Senegal, con un 6,5 %, a Brasil, con un 4,6 %, a Nepal, con un 3,7 %, a Uganda, con un 3,5 %, e incluso a Nigeria, que solo dedica un 1,9 % de su PIB a pagar el salario de su plantilla pública (*Lo público contra la austeridad*. Tabla 2). Hemos constatado que el consejo más reciente del FMI a medio plazo es que todos los países se sitúen por debajo de la media mundial de gasto salarial en el sector público en porcentaje del PIB. Esto genera una espiral descendente a largo plazo: una reducción de los recursos disponibles para pagar al profesorado que parece no tener fin y que lleva produciéndose unas cuatro décadas.

TESTIMONIO DESDE LA PRIMERA LÍNEA EN ZAMBIA

“Me llamo Judith Chikonde. Soy maestra en la escuela de primaria St. Patrick de Lusaka, Zambia... Las condiciones de trabajo del profesorado son lamentables. Soy docente de educación especial, pero no me pagan ninguna prestación según lo que estipulan las condiciones laborales. Imparto el doble de clases... y me parece injusto. Enseñar en varias clases aumenta la carga de trabajo del profesorado y repercute en la concentración. Mejoré mi formación y obtuve un máster, pero no me pagan de acuerdo a esa cualificación... Mi salario es demasiado bajo y no me permite ni alquilar una vivienda decente... Es muy duro. Creo que el Gobierno ha dado por sentado nuestro compromiso profesional... Como muchas y muchos docentes, tengo que buscar otras fuentes de ingresos para ganar suficiente dinero y mantener a mi familia. Eso también repercute en mi nivel de atención en la escuela, ya que tengo que dividirme y pensar en encontrar algo para llegar a final de mes”.

Testimonio recogido por la Internacional de la Educación

En todos los países hay **alternativas claras a la austeridad**. Quizás la más obvia es que un gobierno puede optar por aumentar los impuestos de forma progresiva, en lugar de recortar el gasto. De hecho, el FMI calcula que la mayoría de los países podrían incrementar la carga fiscal en relación al PIB en cinco puntos porcentuales para 2030. Eso permitiría a la mayoría de los países doblar su gasto en educación y sanidad y protección social (*Informe Quién se preocupa por el futuro*. Tabla 10). Pero, en la práctica, el FMI no ha formulado esta recomendación y la mayoría de los países sigue manteniendo una carga fiscal inadecuada en relación al PIB, la ha reducido o la ha congelado (*Lo público contra la austeridad*. Tabla 2). En los casos en los que el FMI ha dado asesoramiento en materia impositiva, la tendencia es a priorizar los impuestos regresivos como el IVA (que afectan desproporcionadamente a las mujeres desfavorecidas), en lugar de impulsar las múltiples alternativas de tributación progresiva (que trasladan la carga a las personas y las empresas más ricas, que son las que más pueden pagar).

Una de las justificaciones más sorprendentes para los recortes en el gasto salarial público es que son necesarios para **“liberar el gasto social”**. La idea de que hace falta reducir el gasto en profesorado para mejorar la educación no tiene ningún sentido para nadie que trabaje en el sector educativo. No hay nada más importante para la calidad de la enseñanza que contar



Lusajo Emmanuel, maestro de escuela primaria, Tanzania.
CREDIT: ACTIONAID

con un buen profesorado y los sueldos de las y los docentes suelen suponer hasta el 90 % del presupuesto en educación en todo el mundo. El personal docente es el gasto social necesario para la educación. Pero el argumento es que el gasto en infraestructuras como centros de enseñanza, que se efectúa una sola vez, es de algún modo más importante que abonar los costes recurrentes. Sin embargo, si se repasan las inversiones prioritarias en infraestructuras, en la lista aparecen carreteras, energía, telecomunicaciones y agua, pero no escuelas. Este **fundamentalismo de las infraestructuras** daña doblemente la educación, ya que reduce los recursos disponibles para el profesorado y sustrae fondos de la educación.

El **recorte en el gasto salarial afecta tres veces más y de un modo más intenso a las mujeres y a las niñas**. Si hay restricciones presupuestarias, las niñas tienen más probabilidades de verse excluidas del acceso a la educación básica; a las mujeres se las priva de algunas de sus mejores opciones de tener un trabajo digno en el sector público como docentes o personal educativo; y tanto niñas como mujeres asumen una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que aumenta cuando fracasan los servicios públicos. Priorizar las infraestructuras frente a las personas exacerba esta situación y crea puestos de trabajo en el sector de la construcción, ocupados en su mayoría por hombres, en lugar de empleos en el sector servicios.

A pesar de la dramática y predecible repercusión de los recortes y la contención, ni el FMI ni los ministerios de Finanzas **han valorado el déficit de docentes ni los efectos probables de los recortes** para tomar decisiones basadas en datos. Simplemente han asumido que es necesario, que es lo correcto. Y el problema no es solo que se adopten restricciones sin pruebas ni estudios creíbles, es que tampoco hay ningún interés en recabar nuevas evidencias. Esta situación nos lleva a identificar el fenómeno como un sesgo consciente o inconsciente del FMI y de los ministerios de Finanzas, un pensamiento de grupo, un reflejo de una **mentalidad profundamente arraigada** e irracionalmente contraria al sector público. Su aplicación activa mina la inversión en educación y salud, pero, a pesar de todo, se acepta ciegamente que es algo que hay que hacer.

EL CAMBIO SISTÉMICO QUE NECESITAMOS

La combinación de la pandemia de COVID y la crisis climática son nuestra mejor posibilidad en una generación de forzar un cambio de mentalidad —país por país, si fuera necesario— que coloque el progreso en Educación, Sanidad y otros ámbitos en el centro de las estrategias nacionales de desarrollo, en lugar de considerarlo un mero añadido. Es hora de que el FMI, los gobiernos y los ministerios de Finanzas rechacen la austeridad y den prioridad al sector público. Todos los gobiernos deberían fijar y aplicar objetivos ambiciosos para lograr una reforma fiscal progresiva, que aumente la carga impositiva en relación al PIB al menos hasta el 5 % para 2030, mediante impuestos progresivos, especialmente a la riqueza y a las grandes empresas. También hay que actuar para impulsar programas de reescalonamiento y cancelación de la deuda más ambiciosos, que ayuden a los gobiernos a reestructurar su deuda y dar prioridad a la inversión en servicios públicos de calidad. Los gobiernos han de establecer metas ambiciosas para ampliar la masa salarial pública año tras año, revitalizar de forma drástica los servicios públicos tras décadas de declive y recurrir a las referencias internacionales para orientar las inversiones, como pieza maestra de la recuperación pospandemia, el desarrollo humano y la transición ecológica. El personal del sector público debe considerarse parte de la infraestructura esencial de un país que requiere protección e inversión, incluso (o, mejor dicho, especialmente) en el momento álgido de una recesión. Además, es necesario avanzar hacia una planificación económica a largo plazo centrada en el bienestar y que integre de forma coherente la rentabilidad prevista de los servicios públicos a largo plazo en los planes a medio plazo. Para lograr este cambio sistémico, ¡hemos de apoyar en todos los países movimientos sociales amplios, que condenen la austeridad y fortalezcan el sector público!

actionaid

ActionAid is a global movement of people working together to achieve greater human rights for all and defeat poverty. We believe people in poverty have the power within them to create change for themselves, their families and communities. ActionAid is a catalyst for that change.

Website: www.actionaid.org
International Registration number: 27264198
Telephone: +27 11 731 4500
Email: mailjhb@actionaid.org



Education International (EI) is the Global Union Federation that brings together organisations of teachers and other education employees from across the world. Through 383 member organisations, EI represents more than 32 million teachers and education support personnel in 178 countries and territories.

Website: www.ei-ie.org